

# UNAMOS BOLETIN INTERNACIONAL

DÍA INTERNACIONAL DE

8M

## LA MUJER

¡QUEREMOS UNA NICARAGUA  
JUSTA PARA LAS MUJERES!

### Siete años de represión, cárcel y exilio para las mujeres de Nicaragua

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la situación de las mujeres en Nicaragua refleja la profunda crisis de derechos humanos que enfrenta el país. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su represión contra las mujeres nicaragüenses, desde la criminalización de la protesta hace 7 años hasta la persecución política, el encarcelamiento, la desaparición forzada y el exilio.

### Presas políticas y exilio forzado

Al menos siete mujeres permanecen como presas políticas en Nicaragua, de acuerdo con el informe más reciente del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, publicado en enero de 2025.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado que muchas de ellas son víctimas de violencia dentro del sistema carcelario, donde enfrentan torturas, aislamiento prolongado, falta de acceso a atención médica y condiciones de alimentación precarias, en un intento por quebrantar su resistencia.

Además de la represión dentro de las cárceles, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue utilizando las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias para silenciar a liderazgos femeninos opositores.

Esta persecución política ha forzado al exilio a más de 200,000 nicaragüenses, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Solo en 2024, al menos 10,000 personas migraron, de las cuales el 52 % son mujeres, muchas de ellas

periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos que han sido despojadas de su nacionalidad y bienes por el gobierno.

La persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llevado a la crisis de apatriadía más grave en la historia reciente del país. Según datos de la organización Monitoreo Azul y Blanco, el gobierno ha prohibido la entrada al país a al menos 290 nicaragüenses entre enero y febrero de 2024. De este total, el 36 % son mujeres, a quienes se les ha negado el derecho a regresar a su tierra natal, condenándolas a un exilio forzado e incierto.

Ser apátrida significa vivir en un limbo legal. Quienes han sido despojados de su nacionalidad enfrentan restricciones severas en su vida cotidiana: no pueden acceder a documentos de identidad, lo que les impide abrir cuentas bancarias, obtener empleo formal, recibir atención médica en muchos países o incluso viajar libremente. Muchos han perdido propiedades, al ser confiscadas por el Estado nicaragüense bajo el argumento de “traición a la patria”.

## **Violencia estructural y ausencia de derechos**

La crisis política en Nicaragua ha profundizado la violencia estructural contra las mujeres, en un contexto donde las instituciones estatales han debilitado los mecanismos de protección y justicia. El país es uno de los pocos en el mundo que mantiene la penalización total del aborto, una prohibición vigente desde hace 17 años que pone en riesgo la vida de miles de mujeres y niñas cada año.

El cierre masivo de organizaciones feministas ha contribuido a la desprotección. Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado más de 3,500 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquellas dedicadas al acompañamiento ante el abuso sexual y la defensa de derechos reproductivos a niñas, adolescentes y mujeres. Con la eliminación de estos espacios, las víctimas han quedado sin redes de apoyo y con menos posibilidades de acceder a justicia.

Mientras la violencia contra las mujeres sigue en aumento, el gobierno ha centrado sus esfuerzos en la aplicación de leyes represivas dirigidas a silenciar y controlar a la población. La impunidad se mantiene como la norma, dejando a las víctimas y sus familias sin acceso a justicia y perpetuando un ciclo de violencia que sigue cobrando sus vidas.

A la falta de derechos reproductivos se suma la creciente violencia feminicida. Según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, en los primeros días de enero de 2025 ya se habían registrado al menos ocho femicidios. En 2024, la cifra alcanzó los 91 casos, un aumento alarmante respecto a los 74 documentados en 2023 y los 68 en 2022. Estos datos reflejan una escalada de violencia machista y la ausencia de políticas estatales efectivas para la prevención y protección de las mujeres.

La dictadura orteguista también se jacta de que Nicaragua se encuentra entre los diez países con mayor igualdad de género. Esta paridad impuesta mediante la Ley No 648, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, conocida como Ley 50/50, ha generado una presencia clientelar y partidista en cargos públicos.

Mientras, el régimen autoritario de Ortega y Murillo se promociona como un referente en igualdad de género, la paridad en cargos públicos se instrumentaliza como estrategia de control político. En 2023, la dictadura creó “cojefaturas” en la Policía Nacional y ascendió a 19 comisionadas generales, en un intento de reforzar la represión con presencia femenina en la institución. Sin embargo, no representa un liderazgo participativo, sino un “pago de lealtades” hacia la copresidencia.

Sin acceso a justicia y con la represión en aumento, las redes de mujeres en el exilio son el último bastión para documentar y denunciar las violencias estatales. En un país donde la impunidad es la norma, la lucha por los derechos de las mujeres continúa fuera de sus fronteras.

## Contundente informe del GHREN

Durante el 58º período de sesiones —el 28 de febrero de 2025 en Ginebra, Suiza— del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el GHREN presentó los resultados de su último informe.

El informe, tan consistente como los anteriores, reitera y constata que en Nicaragua, se han cometido y se siguen cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos.

Especial relevancia tiene en el informe, la comprobación involucramiento del Ejército en la represión contra la ciudadanía, especialmente después de abril del 2018.

El Grupo de Expertos ha insistido en la necesidad de acciones globales que frenen a la dictadura y la lleven a rendir cuentas a tribunales internacionales.

La dictadura reaccionó, anunciando su retiro del Consejo de Derechos Humanos. Dicha acción no exime al régimen de sus responsabilidades internacionales

# UNAMOS INTERNATIONAL BULLETIN

DÍA INTERNACIONAL DE

8M

## LA MUJER

¡QUEREMOS UNA NICARAGUA JUSTA PARA LAS MUJERES!

### Seven Years of Repression, Imprisonment, and Exile for Nicaraguan Women

On this March 8, International Women's Day, the situation of women in Nicaragua reflects the deep human rights crisis the country is facing. The regime of Daniel Ortega and Rosario Murillo has intensified its repression against Nicaraguan women, from the criminalization of protests seven years ago to political persecution, imprisonment, enforced disappearances, and exile.

### Political prisoners and forced exiled

At least seven women remain political prisoners in Nicaragua, according to the latest report from the Mechanism for the Recognition of Political Prisoners, published in January 2025. The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has denounced that many of them are victims of violence within the prison system, where they endure torture, prolonged isolation, lack of access to

medical care, and precarious food conditions in an attempt to break their resistance.

Beyond repression inside prisons, the Ortega-Murillo regime continues to use enforced disappearances and arbitrary detentions to silence opposition female leaders.

This political persecution has forced more than 200,000 Nicaraguans into exile, according to data from the United Nations Refugee Agency (UNHCR). In 2024 alone, at least 10,000 people migrated, 52% of whom were women—many of them journalists, activists, and human rights defenders who have been stripped of their nationality and assets by the government.

The Ortega-Murillo regime's persecution has led to the most severe statelessness crisis in the country's recent history. According to the organization Monitoreo Azul y Blanco, the government has denied entry to at least 290 Nicaraguans between January and February 2024. Of this total, 36% were women, who were refused the right to return to their homeland.

Being stateless means living in legal limbo. Those stripped of their nationality face severe restrictions in their daily lives: they cannot access identity documents, which prevents them from opening bank accounts, obtaining formal employment, receiving medical care in many countries, or even traveling freely. Condemning them to forced and uncertain exile. Many have lost their properties, which were confiscated by the Nicaraguan state under the charge of "treason."

## **Structural Violence and Lack of Rights**

The political crisis in Nicaragua has deepened structural violence against women, in a context where state institutions have weakened protection and justice mechanisms. The country is one of the few in the world that maintains a total ban on abortion, a prohibition in place for 17 years that puts the lives of thousands of women and girls at risk every year.

The massive shutdown of feminist organizations has further contributed to this lack of protection. Since 2018, the Ortega-Murillo regime has canceled more than 3,500 civil society organizations, including those dedicated to assisting survivors of sexual abuse and defending the reproductive rights of girls, adolescents, and women. With the elimination of these spaces, victims have been left without support networks and with fewer possibilities of accessing justice.

While violence against women continues to rise, the government has focused its efforts on enforcing repressive laws aimed at silencing and controlling the population. Impunity remains the norm, leaving victims and their families without access to justice and perpetuating a cycle of violence that continues to claim lives.

In addition to the lack of reproductive rights, femicide is on the rise. According to the Observatory of Catholics for the Right to Decide, at least eight femicides were recorded in the first days of January 2025. In 2024, the number reached 91 cases—an alarming increase compared to the 74 documented in 2023 and 68 in 2022. These figures reflect a surge in gender-based violence and the absence of effective state policies for the prevention and protection of women.

The Ortega dictatorship also boasts that Nicaragua is among the ten countries with the highest gender equality. This parity, imposed through Law No. 648, the Equal Rights and Opportunities Law—known as the 50/50 Law—has led to a clientelist and partisan presence in public positions.

While the authoritarian Ortega-Murillo regime promotes itself as a model of gender equality, parity in public office is merely used as a political control strategy.

In 2023, the dictatorship created "co-leaderships" in the National Police and promoted 19 female generals, in an attempt to reinforce repression with a female presence within the institution. However, this does not represent genuine participatory leadership but rather a "loyalty payment" to the co-presidency.

With no access to justice and repression increasing, women's networks in exile remain the last stronghold for documenting and denouncing state violence. In a country where impunity is the norm, the fight for women's rights continues beyond its borders.

## Convincing report from GHREN

During the 58th session of the UN Human Rights Council on February 28, 2025 in Geneva, Switzerland, the GHREN presented the results of its latest report.

The report, as consistent as the previous ones, reiterates and confirms that serious human rights violations have been and continue to be committed in Nicaragua.

Particularly relevant in the report is the verification of the involvement of the Army in the repression against citizens, especially after April 2018.

The Group of Experts has insisted on the need for global actions to stop the dictatorship and bring it to account in international courts. The dictatorship reacted by announcing its withdrawal from the Human Rights Council. This action does not exempt the Oreguismo from its international responsibilities.